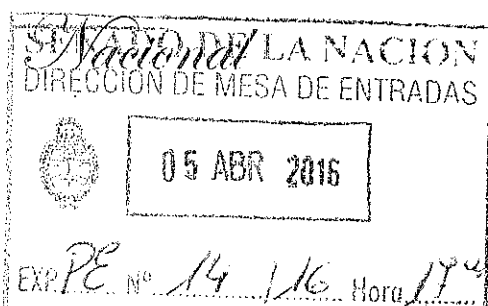
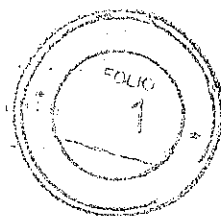


El Poder Ejecutivo

553



BUENOS AIRES, - 4 ABR 2016

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN:

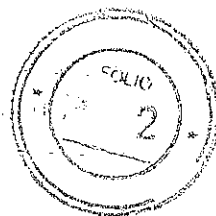
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a la unificación de los fueros de la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal y en lo Correccional de la Capital Federal y a la implementación del juicio unipersonal para determinados supuestos.

El presente proyecto de ley se encuentra inscripto en el marco de un plan piloto de rediseño de la organización judicial nacional y federal, compuesto por un conjunto de iniciativas cuyo tratamiento y sanción se solicita se realice en forma articulada a fin de alcanzar sus DOS (2) objetivos centrales.

El primer objetivo es facilitar la investigación, juzgamiento y sanción de la delincuencia organizada y de los delitos vinculados a ella, en orden a la política de Estado contenida en la "Declaración de Emergencia de Seguridad Pública" en la totalidad del territorio nacional plasmada en el Decreto N° 228 del 21 de enero de 2016.

El segundo de los objetivos de este plan piloto es lograr la adecuación progresiva de las actuales estructuras judiciales al CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por la Ley N° 27.063, pendiente de implementación de acuerdo a lo establecido por el artículo 2° de la Ley N° 27.150 y

El Poder Ejecutivo Nacional



su modificatorio.

Asimismo, el presente proyecto se integra dentro del Plan Justicia 2020 propiciado por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, cuyo objetivo es que la justicia se transforme en actor principal en la vida de los argentinos y permita la resolución de conflictos en forma independiente, rápida y segura, mediante el fortalecimiento integral del sistema judicial.

Dada la postergación en la implementación del nuevo CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN y la suspensión de la aplicación de la LEY DE ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DE LA JUSTICIA FEDERAL Y NACIONAL PENAL N° 27.146, el presente proyecto tendrá la modalidad de Plan Piloto, lo que permitirá adecuar progresivamente las estructuras judiciales con miras a emprender luego las reformas de mayor envergadura que resulten necesarias.

Sumado a ello, mediante el proyecto cuya aprobación se propone se están cimentando las bases para la transferencia de competencias penales que se efectuarán en un futuro a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Concretamente, las reformas aquí propuestas se orientan al rediseño de la organización de la justicia nacional a fin de fomentar y facilitar la investigación y el juzgamiento de los delitos de su competencia y, de ese modo, optimizar la respuesta jurisdiccional frente a esos casos para así superar la desconfianza que reina sobre el sistema judicial actual.

El Poder Ejecutivo Nacional



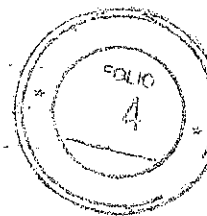
Para alcanzar dichos fines, las medidas aquí propuestas apuntan, en primer lugar, a la unificación de los fueros de la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción y en lo Correccional y, en segundo término, a la implementación del juicio unipersonal para determinados supuestos.

En la actualidad la Justicia Nacional en lo Penal está integrada por el fuero Nacional en lo Criminal de Instrucción compuesto por CUARENTA Y NUEVE (49) juzgados y el fuero Nacional en lo Correccional conformado por CATORCE (14) juzgados. En consecuencia, ambos fueros totalizan SESENTA Y TRES (63) juzgados. Del universo de Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción, DIECISIETE (17) se encuentran vacantes; mientras que de los Juzgados Nacionales en lo Correccional existen TRES (3) vacantes.

Según las últimas estadísticas publicadas por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en el año 2012 tramitaron ante el fuero Nacional en lo Criminal de Instrucción un total de SETENTA MIL TREINTA Y TRES (70.033) causas, de las cuales TREINTA Y UN MIL NOVECIENTAS SETENTA Y SEIS (31.976) eran remanentes de otros años, SEIS MIL CUATROCIENTAS SESENTA (6.460) reingresaron al fuero, mientras que TREINTA Y UN MIL QUINIENTAS NOVENTA Y SIETE (31.597) fueron las iniciadas ese año. Dicho volumen de causas representa un promedio de MIL CUATROCIENTAS VEINTINUEVE (1.429) causas en trámite por juzgado.

Sobre la forma de resolución de los casos, corresponde señalar que durante el año 2012 se dispuso la incompetencia o la

El Poder Ejecutivo Nacional

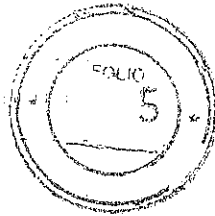
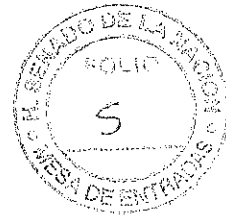


desestimación en un DIECISIETE CON CINCUENTA Y NUEVE POR CIENTO (17,59%) de los casos, el archivo para un DIECISIETE CON TREINTA Y DOS POR CIENTO (17,32%) y la elevación a juicio en otro QUINCE CON CERO NUEVE POR CIENTO (15,09%). El restante CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los casos figura agrupado en "otras formas" entre las que se encuentran sobreseimientos, acumulaciones, remisiones por conexidad y devoluciones al juzgado de origen.

Por su parte, ante el fuero Nacional en lo Correccional tramitaron un total de SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS (79.266) causas, de las cuales SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTAS NUEVE (69.309) fueron iniciadas ese mismo año, mientras que NUEVE MIL QUINIENTAS VEINTISÉIS (9.526) eran remanentes de otros años y CUATROCIENTAS TREINTA Y UNA (431) reingresaron al fuero. Ello representa un promedio de CINCO MIL SEISCIENTAS SESENTA Y DOS (5.662) causas en trámite por juzgado.

Asimismo, durante el año 2012 se resolvieron o salieron de la órbita del fuero el OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (83,34%) de las causas en trámite, equivalente a SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO (66.064) causas. Respecto de la forma de resolución de los casos, en el VEINTISIETE CON TREINTA Y UNO POR CIENTO (27,31%) se dispuso el archivo (18.044 casos), en el VEINTIUNO CON OCHENTA Y SIETE POR CIENTO (21,87%) se resolvió el sobreseimiento (14.444 causas), mientras que la incompetencia o desestimación se decretó en el SIETE CON OCHENTA Y CUATRO

El Poder Ejecutivo Nacional



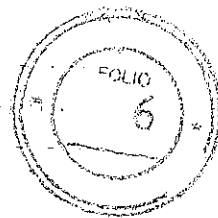
POR CIENTO (7,84%) de los casos (5.178 causas). El CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y TRES POR CIENTO (41,83%) restante de los casos aparece dentro de la categoría "otras formas" (27.636 causas), entre las que se encuentran la suspensión del juicio a prueba, acumulación a otro expediente, devolución al juzgado de origen y nulidades, y el CERO CON SETENTA Y SEIS POR CIENTO (0,76%) corresponde a declaraciones de rebeldía (505 causas). Cabe señalar que el debate se celebró en menos del UNO POR CIENTO (1%) de los casos (257 causas que equivalen al 0,39% de los casos).

Al componer los casos ingresados ante el fuero Nacional en lo Correccional y el fuero Nacional en lo Criminal de Instrucción, advertimos que en el transcurso del año 2012 se iniciaron CIENTO MIL NOVECIENTOS SEIS (100.906) casos. Si a ello le sumamos el remanente de casos de años anteriores y las causas reingresadas, concluimos que durante el año 2012 tramitaron ante ambos fueros CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (149.299) casos.

Tomando este último dato y, con el objetivo de corregir el desequilibrio en la asignación de los casos a los que se hizo referencia, resulta adecuado unificar los Juzgados Nacionales en lo Correccional con los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción, por lo que éstos pasarán a denominarse Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional.

Los magistrados actualmente titulares de los Juzgados Nacionales en lo Correccional y de los Juzgados Nacionales en lo Criminal

*El Poder Ejecutivo
Nacional*



de Instrucción, pasarán a desempeñarse como Jueces Nacionales en lo Criminal y Correccional, permaneciendo en sus funciones y atendiendo las causas, según sea el caso, que tramitan en sus respectivos juzgados, como así también las nuevas que ingresen, según la distribución de turnos que establezca oportunamente la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL.

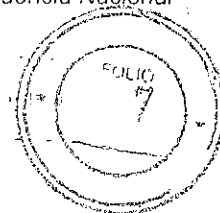
A partir de la carga de trabajo proyectada y las vacancias detectadas, corresponde establecer que la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional quede conformada por SESENTA Y TRES (63) Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional, lo que permitirá niveles de trabajo semejantes a los que se vienen sosteniendo hasta el presente.

Teniendo presente los datos estadísticos sobre la cantidad de juicios correccionales celebrados por los Juzgados Nacionales en lo Correccional, sumado a que a partir de la unificación de los fueros todos los debates se celebrarán ante los TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, se postula la disolución de UNA (1) de las DOS (2) Secretarías correspondientes a los Juzgados Nacionales en lo Correccional.

A partir de la entrada en vigencia del presente proyecto de ley, los Tribunales Orales en lo Criminal tendrán, juntamente con la competencia material y territorial que actualmente poseen, la atribuida al juzgamiento que tienen actualmente los Juzgados Nacionales en lo Correccional según los alcances del artículo 27 del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por Ley Nº 23.984 y sus modificatorias. Para el juzgamiento de

[Handwritten signature]

El Poder Ejecutivo Nacional



los casos correccionales continuarán rigiendo las normas establecidas en el Libro III, Título II Capítulo I del citado Código.

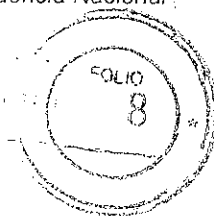
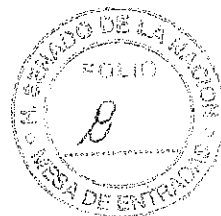
En consecuencia, los Tribunales Orales en lo Criminal pasarán a denominarse Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional.

El presente proyecto establece que aquellos casos actualmente radicados ante los ex Juzgados Nacionales en lo Correccional que se encuentren en etapa de juicio, serán reasignados mediante sorteo a los TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, con excepción de aquellos en los que se hubiere cumplido con el trámite del artículo 354 del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN.

En la actualidad existen TREINTA (30) Tribunales Orales en lo Criminal, siendo que tan sólo DOCE (12) se encuentran plenamente integrados, existiendo a la fecha VEINTITRÉS (23) vacantes de jueces. Ello implica que TRECE (13) Tribunales Orales en lo Criminal están integrados por DOS (2) jueces titulares, y CINCO (5) Tribunales Orales en lo Criminal cuentan con tan sólo UN (1) juez titular. A su vez existen TRES (3) Tribunales Orales de Menores, de los cuales sólo UNO (1) de ellos se encuentra plenamente integrado, existiendo CUATRO (4) vacantes de jueces.

A partir de los datos estadísticos de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION del año 2013, se pudo establecer que durante ese año ingresaron SIETE MIL CUATROCIENTAS CUARENTA (7.440) causas en los TREINTA (30) Tribunales Orales en lo Criminal. Ese número de casos,

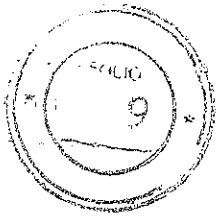
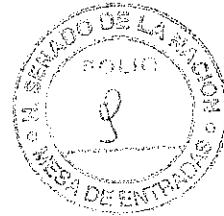
El Poder Ejecutivo Nacional



sumados a los CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA (4.860) existentes y a los SEISCIENTOS VEINTICINCO (625) reingresados, permite afirmar que durante 2013 tramitaron ante los Tribunales Orales en lo Criminal DOCE MIL NOVECIENTAS VEINTICINCO (12.925) causas, lo que equivale a un promedio de CUATROCIENTAS TREINTA Y UNA (431) causas por Tribunal, aproximadamente UN TERCIO (1/3) del promedio de causas que tramitan por cada Juzgado en lo Criminal de Instrucción.

Continuando con los datos emergentes de dicho informe sobresale que, durante el año 2013, de las DOCE MIL NOVECIENTAS VEINTICINCO (12.925) causas se resolvieron SIETE MIL SETECIENTAS CUARENTA Y SEIS (7.746). Un TREINTA Y UNO CON NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (31,98%), es decir, DOS MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y SIETE (2.477) causas, tuvo una solución categorizada como de "otras formas", mientras que un TREINTA Y DOS CON CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (32,49%), equivalente a DOS MIL QUINIENTAS DIECISIETE (2.517) causas, se aplicó el procedimiento de juicio abreviado, un QUINCE CON DIECISIETE POR CIENTO (15,17%), es decir MIL CIENTO SETENTA Y CINCO (1.175) casos, por incompetencia, y tan sólo DOCE CON SETENTA Y NUEVE POR CIENTO (12,79%), equivalente a NOVECIENTOS NOVENTA Y UN (991) casos, por la realización de un debate oral. El resto de los casos se resolvieron a partir de sobreseimientos (447 casos que representan un 5,78%), y prescripciones (139 casos que representan un 1,79%).

El Poder Ejecutivo Nacional

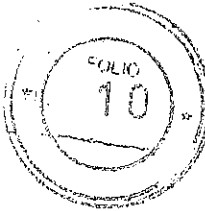


Estos datos arrojan que en tan sólo UNA (1) de cada DIEZ (10) causas radicadas ante los Tribunales Orales en lo Criminal se sustancia el debate oral.

Asimismo, al analizar esas DOCE MIL NOVECIENTAS VEINTICINCO (12.925) causas, se pudo establecer que los principales delitos por las que se iniciaron se distribuyen de la siguiente manera: el SETENTA Y CUATRO POR CIENTO (74 %), equivalente a NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO (9545) casos, eran de delitos contra la propiedad, seguidos de un número mucho menor por los delitos contra la libertad -SEISCIENTOS VEINTE (620) casos-, de delitos contra las personas -SEISCIENTOS DOS (602) casos, de delitos contra la integridad sexual -QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS (586) casos y de delitos contra la administración pública -en QUINIENTOS VEINTE (520) casos-, los restantes QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO (585) casos corresponden a otros delitos. Asimismo se detectaron CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE (467) casos de homicidios, que no se incluyen dentro del universo de casos agrupados en la categoría "contra las personas".

Por su parte, desde el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, durante los meses de julio a septiembre del año 2015 y bajo la coordinación de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL y la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE JUSTICIA Y LEGISLACIÓN PENAL, con la colaboración de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y ASUNTOS PENITENCIARIOS, se

El Poder Ejecutivo Nacional

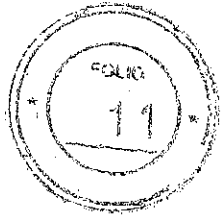


realizó un relevamiento de los expedientes resueltos ante los Tribunales Orales en lo Criminal, a fin de conocer algunos aspectos del funcionamiento de la justicia nacional. La metodología consistió en el análisis de causas resueltas durante marzo y abril del año 2015 en SEIS (6) de los TREINTA (30) Tribunales Orales en lo Criminal elegidos aleatoriamente. Entre las conclusiones a las que se llegó podemos destacar que, de los casos sometidos a juicio oral, el OCHENTA Y SEIS POR CIENTO (86 %) de las sentencias condenatorias impusieron penas menores a los NUEVE (9) años de prisión.

En cuanto a la distribución de las condenas en debate oral según tipo de delito, predominan los robos con armas -TREINTA POR CIENTO (30 %)-, los robos agravados -VEINTE POR CIENTO (20 %)-, las amenazas -CATORCE POR CIENTO (14 %)- y los robos simples -TRECE POR CIENTO (13 %).

De dicho estudio también se pudo concluir que de las causas resueltas en el debate oral, el CUARENTA POR CIENTO (40 %) se celebró en los primeros SEIS (6) meses, el DIECIOCHO POR CIENTO (18 %) entre los SEIS (6) meses y el año, el VEINTICUATRO POR CIENTO (24 %) entre el primer año y el segundo y el DIECIOCHO POR CIENTO (18 %) restante demoró entre DOS (2) y CUATRO (4) años hasta que se celebró el debate oral. Esto arroja una media de tiempo para la realización del debate oral de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (299) días desde que la causa fue radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal.

*El Poder Ejecutivo
Nacional*



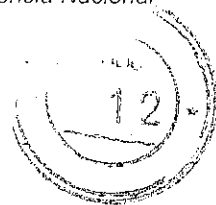
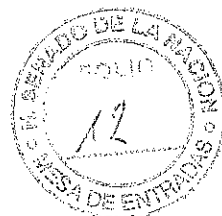
En lo que respecta a los TRIBUNALES ORALES DE MENORES, durante el año 2013 tramitaron OCHO MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y TRES (8.463) causas, de las cuales el OCHENTA Y SEIS POR CIENTO (86 %) correspondía a causas iniciadas en años anteriores al mencionado, menos del UNO POR CIENTO (1 %) a casos reingresados y sólo el TRECE POR CIENTO (13 %) restante fueron iniciadas ese año.

De aquellas OCHO MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y TRES (8.463) causas en trámite, sólo el DIECISÉIS CON CERO NUEVE POR CIENTO (16,09 %), es decir, MIL TRESCIENTAS SESENTA Y DOS (1.362) causas se resolvieron o salieron de la órbita del fuero.

En cuanto a la forma de resolución de los MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS (1362) casos, un DIECISIETE CON CERO TRES POR CIENTO (17,03 %) lo fue mediante juicio abreviado; en un CUATRO CON CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (4,55 %) se dispuso el sobreseimiento de los imputados; en un ONCE CON TREINTA Y UNO POR CIENTO (11,31%) se declaró la incompetencia; en un VEINTIDÓS CON TREINTA Y DOS POR CIENTO (22,32 %) se resolvió la prescripción de la acción penal; en un DIECINUEVE CON TREINTA Y OCHO POR CIENTO (19,38%) se dispuso el archivo de la causa y, únicamente, en un OCHO CON CERO OCHO POR CIENTO (8,08 %) de los casos se celebró el debate oral. El restante DIECISIETE CON TREINTA Y TRES (17,33 %) fue resuelto mediante "otras formas".

La creciente y constante carga de trabajo de los

El Poder Ejecutivo Nacional



Tribunales Orales, atenta contra la adecuada y eficiente administración de justicia, contribuyendo a que muchas cuestiones no sean sometidas al debate oral y sean resueltas por otras vías, entre ellas, el dictado de sobreseimientos por prescripción de la acción penal o juicios abreviados. Esto impide que los procesos se resuelvan a partir de una sentencia absolutoria o condenatoria como resultado de un debate oral y público, que es la forma más acabada de impartir justicia.

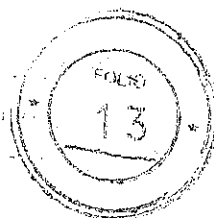
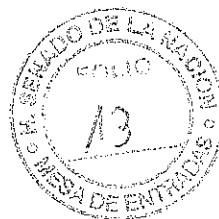
La culminación de los procesos penales mediante el dictado de una sentencia condenatoria o absolutoria implica expedirse sobre el fondo de la cuestión debatida, permitiendo el debido esclarecimiento de los hechos sometidos a juicio. La sentencia como resultado del desarrollo de un debate es parte fundamental del sistema republicano y, también, de la publicidad de los actos de gobierno.

Todos estos datos obligan a efectuar ajustes en la organización y esquema de la Justicia Nacional y dotar a los jueces de herramientas que los habiliten a tener mayor agilidad para el manejo y resolución de los casos.

En esta inteligencia, la sustanciación del juicio oral en presencia de un solo Magistrado en lugar de un Tribunal colegiado, mejoraría ampliamente el servicio de justicia sin mengua alguna de derechos y garantías constitucionales.

La realización de juicios orales ante un Tribunal con integración unipersonal tiene aplicación desde hace varios años en las Provincias de BUENOS AIRES, MENDOZA, CÓRDOBA, CHUBUT, SALTA, SANTA

El Poder Ejecutivo Nacional



FÉ y ENTRE RÍOS.

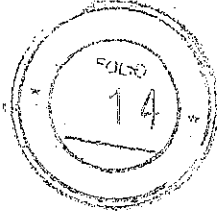
Esta forma de juicio permite un mejor servicio de justicia, mediante una más rápida y eficaz solución de los procesos, con las amplias garantías que brinda la audiencia de juicio en presencia de un magistrado imparcial e independiente.

La posibilidad de revisión amplia por parte de la CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL que se instaura a partir de la sentencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN del 20 de septiembre de 2005, dictada en la causa n° 1681, caratulada "CASAL, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa" (Fallos: 328:3399), garantiza la vigencia de las garantías del proceso y opera como un reaseguro de éstas. Por lo tanto, la sentencia emanada de un Tribunal integrado de manera unipersonal no vulnera lo establecido por el Máximo Tribunal, toda vez que la garantía aludida se mantiene incólume.

Teniendo presente los datos que se han expuesto a lo largo de estos fundamentos relativos al número de tribunales orales, cantidad de jueces, vacancias, juicios orales sustanciados, volumen de causas en trámite, los tipos de delito mayormente sometido a debate oral, su consecuente pena en expectativa y los montos de pena que se imponen producto de los debates orales, corresponde seguir los lineamientos de los Códigos Procesales Penales de las Provincias de BUENOS AIRES, CÓRDOBA, MENDOZA, SALTA, CHUBUT, SANTA FÉ y ENTRE RÍOS.

En tal sentido, y teniendo en cuenta las escalas

El Poder Ejecutivo Nacional

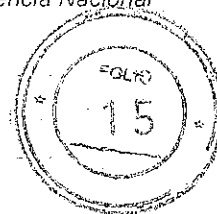


penales de los delitos cuyo juzgamiento estará asignado a los TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL y TRIBUNALES ORALES DE MENORES, encontramos que aproximadamente CIENTO CINCUENTA (150) delitos tienen una pena en abstracto de hasta SEIS (6) años. Otros CUARENTA Y SIETE (47) delitos tienen una pena en abstracto cuyo máximo oscila entre SEIS (6) y QUINCE (15) años. Y, finalmente, unos DIECISIETE (17) delitos poseen penas cuyo máximo en abstracto excede de QUINCE (15) años.

En consecuencia, en la norma proyectada se establece que los jueces integrantes de los TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL ejerzan la jurisdicción en forma unipersonal en el trámite y resolución de las solicitudes de suspensión del proceso a prueba, en los supuestos de juicio abreviado, en la sustanciación del juicio en los delitos de acción privada y en aquellos delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad, o cuando se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto no exceda de SEIS (6) años. Asimismo, se prevé la actuación unipersonal cuando se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los SEIS (6) años y no exceda de QUINCE (15) años o en caso de concurso de delitos ninguno de ellos supere dicho monto, salvo que el imputado o su defensor requieran la integración colegiada en oportunidad de la notificación del requerimiento de elevación a juicio.

Con relación a los TRIBUNALES ORALES DE MENORES, se propone seguir el mismo criterio que el establecido para los

*El Poder Ejecutivo
Nacional*



TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, con excepción de aquellos casos en cuyo juzgamiento no tienen competencia.

Por el contrario, indefectiblemente, corresponderá la integración colegiada del TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL y del TRIBUNAL ORAL DE MENORES para el juzgamiento de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los QUINCE (15) años.

La sustanciación del juicio en los supuestos de delitos de acción privada, o reprimidos con pena no privativa de la libertad, o delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto no exceda de TRES (3) años, tramitarán de acuerdo con las normas correspondientes de los Juicios Especiales regulados en el CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por la Ley N° 23.984 y sus modificatorias.

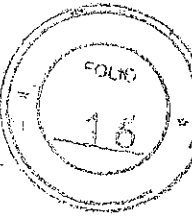
En aquellos supuestos en los cuales corresponda el ejercicio de la jurisdicción en forma unipersonal, el Presidente del Tribunal procederá al sorteo de las causas entre los TRES (3) magistrados, según el ingreso de causas y bajo un sistema de compensación, de forma tal que la adjudicación sea equitativa.

Consecuentemente se propician asimismo, diversas modificaciones al CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias, y a la Ley N° 24.050.

El esquema propuesto brinda la posibilidad de

"2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

El Poder Ejecutivo Nacional



multiplicación de capacidades, al permitir que los jueces actúen individualmente en una amplia cantidad de debates orales, lo que contribuirá a descomprimir el actual cúmulo de causas que colapsan los Tribunales Orales de la Justicia Nacional, garantiza el acceso al juicio oral de un mayor número de casos, evitando su prescripción o resolución por medios que obturan el debate oral, sin mengua de los derechos de defensa ni al debido proceso.

Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.

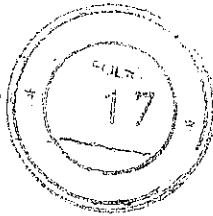
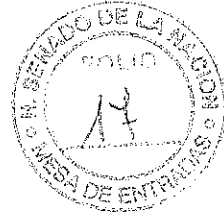
Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

MENSAJE N° 553

DR. MARCOS PEÑA
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DR. GERMAN CARLOS GARAVANO
MINISTRO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS

*El Poder Ejecutivo
Nacional*



EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO,...

SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY:

LEY DE UNIFICACIÓN DE FUEROS Y JUICIO UNIPERSONAL

CAPÍTULO I

JUSTICIA NACIONAL EN LO PENAL

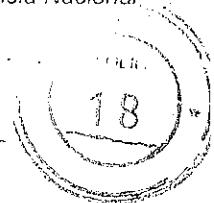
ARTÍCULO 1°.- Los JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN y los JUZGADOS NACIONALES EN LO CORRECCIONAL se denominarán JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL y mantendrán la integración de aquéllos, con excepción de lo dispuesto por el artículo 3° de la presente ley y se los individualizará conforme lo establezca la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 2°.- Los JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL conocerán en los casos establecidos en el artículo 26 del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 3°.- Dispónese la disolución de UNA (1) Secretaría de cada ex JUZGADO NACIONAL EN LO CORRECCIONAL, las que serán seleccionadas por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 4°.- Los funcionarios y empleados de las Secretarías cuya disolución se disponga de conformidad con el artículo 3°, serán reubicados por la autoridad competente en otros órganos jurisdiccionales según las necesidades operativas.

El Poder Ejecutivo Nacional



ARTÍCULO 5°.- La CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL establecerá la distribución de los turnos de los JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL en los distintos distritos.

ARTÍCULO 6°.- Los TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL se denominarán TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL y tendrán, juntamente con la competencia material y territorial que fuera asignada a aquéllos, la atribuida al juzgamiento que, previo a la entrada en vigencia de la presente ley, tienen los JUZGADOS NACIONALES EN LO CORRECCIONAL.

CAPÍTULO II

JUICIO UNIPERSONAL Y COLEGIADO

ARTÍCULO 7°.- Los TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL juzgarán, de forma unipersonal o colegiada según corresponda, en instancia única de los delitos cuya competencia no se atribuya a otro tribunal.

ARTÍCULO 8°.- Los TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL se integrarán con UN (1) solo juez:

- a) en los supuestos del Libro II, Título IV, Capítulo III, del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias;
- b) en los supuestos del Libro III, Título II, Capítulo IV, del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias;
- c) si se tratare de delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad y aquellos de acción privada;
- d) si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto no exceda de SEIS (6) años;

El Poder Ejecutivo Nacional



e) si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los SEIS (6) años y no exceda de QUINCE (15) años, o, en caso de concurso de delitos, ninguno de ellos se encuentre reprimido con pena privativa de la libertad que supere dicho monto, salvo que el imputado o su defensor requirieren la integración colegiada, opción que deberá ejercerse indefectiblemente en la oportunidad prevista por el artículo 349 del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias.

La sustanciación del juicio para los casos previstos por los incisos c) y d) en los supuestos en los que la pena máxima privativa de la libertad en abstracto no exceda de los TRES (3) años, se regirá por las normas del Libro III, Título II, Capítulos I y III, según corresponda, del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias.

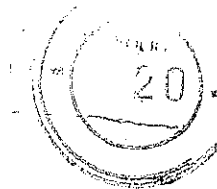
Los TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL se integrarán con TRES (3) jueces si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto exceda de QUINCE (15) años.

En caso de existir DOS (2) o más imputados con pluralidad de defensores, la elección por UNO (1) de ellos del juzgamiento colegiado obligará en igual sentido a los restantes.

ARTÍCULO 9°.- Los TRIBUNALES ORALES DE MENORES se integrarán con UN (1) solo juez:

a) en los supuestos del Libro II, Título IV, Capítulo III, del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias;

El Poder Ejecutivo Nacional



- b) en los supuestos del Libro III, Título II, Capítulo IV, del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias;
- c) si se tratare de delitos cuya pena privativa de la libertad en abstracto sea superior a TRES (3) años y no exceda de SEIS (6) años;
- d) si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los SEIS (6) años y no exceda de QUINCE (15) años o, en caso de concurso de delitos, ninguno de ellos se encuentre reprimido con pena privativa de la libertad que supere dicho monto, salvo que el imputado o su defensor requirieren la intervención colegiada, opción que deberá ejercerse indefectiblemente en la oportunidad prevista por el artículo 349 del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias.

Los TRIBUNALES ORALES DE MENORES se integrarán con TRES (3) jueces si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto exceda de QUINCE (15) años.

En caso de existir DOS (2) o más imputados con pluralidad de defensores, la elección por UNO (1) de ellos del juzgamiento colegiado obligará en igual sentido a los restantes.

ARTÍCULO 10.- En aquellos supuestos de los artículos 8° y 9° en los que intervenga UN (1) solo juez, el Presidente del Tribunal procederá al sorteo de las causas entre los TRES (3) Magistrados, según el ingreso de los casos y bajo un sistema de compensación, de forma tal que la adjudicación sea equitativa.

CAPÍTULO III

*El Poder Ejecutivo
Nacional*



MODIFICACIONES AL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN

ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el artículo 24 del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

"Competencia de la Cámara de Apelación

ARTÍCULO 24.- La CÁMARA DE APELACIÓN conocerá:

- 1º) De los recursos interpuestos contra las resoluciones de los Jueces Nacionales en lo Criminal y Correccional, de Menores, de Ejecución Penal y en lo Penal de rogatorias.
- 2º) De los recursos de queja por petición retardada o denegada por los mismos jueces.
- 3º) De las cuestiones de competencia que se planteen entre ellos."

ARTÍCULO 12.- Sustitúyese el artículo 25 del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

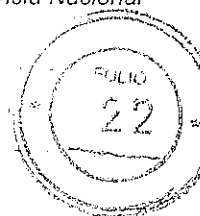
"Competencia de los tribunales orales en lo criminal y correccional

ARTÍCULO 25.- Los TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL juzgarán en única instancia de los delitos cuya competencia no se atribuya a otro tribunal.

Los TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL se integrarán con UN (1) solo juez:

- 1º) En los supuestos del Libro II, Título IV, Capítulo III, de este Código.
- 2º) En los supuestos del Libro III, Título II, Capítulo IV, de este Código.
- 3º) Si se tratare de delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad y aquellos de acción privada.

El Poder Ejecutivo Nacional



4º) Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto no exceda de SEIS (6) años.

5º) Si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los SEIS (6) años y no exceda de QUINCE (15) años, o, en caso de concurso de delitos, ninguno de ellos se encuentre reprimido con pena privativa de la libertad que supere dicho monto, salvo que el imputado o su defensor requirieren la integración colegiada, opción que deberá ejercerse indefectiblemente en la oportunidad prevista por el artículo 349 de este Código.

La sustanciación del juicio para los casos previstos por los incisos 3º) y 4º) en los supuestos en los que la pena máxima privativa de la libertad en abstracto no exceda de los TRES (3) años, se regirá por las normas del Libro III, Título II, Capítulos I y III, según corresponda, de este Código.

Los TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL se integrarán con TRES (3) jueces si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto exceda de QUINCE (15) años.

En caso de existir DOS (2) o más imputados con pluralidad de defensores, la elección por UNO (1) de ellos del juzgamiento colegiado obligará en igual sentido a los restantes."

ARTÍCULO 13.- Sustitúyese el artículo 26 del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

"Competencia del juez nacional en lo criminal y correccional"

ARTÍCULO 26.- El Juez Nacional en lo Criminal y Correccional investiga los delitos cuya competencia no se atribuya a otro tribunal, excepto en los supuestos en los que

El Poder Ejecutivo Nacional



el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL ejercite la facultad que le otorga el artículo 196."

ARTÍCULO 14.- Sustitúyese el artículo 28 del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

"Competencia del tribunal de menores

ARTÍCULO 28.- El tribunal de menores juzgará en única instancia en los delitos cometidos por personas menores de edad al tiempo de la comisión del hecho, aunque hubiesen alcanzado la mayoría de edad al tiempo del juzgamiento, y que estén reprimidos con pena privativa de la libertad mayor de TRES (3) años.

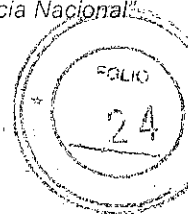
Los Tribunales Orales de Menores se integrarán con UN (1) solo juez:

- 1º) en los supuestos del Libro II, Título IV, Capítulo III, de este Código.
- 2º) en los supuestos del Libro III, Título II, Capítulo IV, de este Código.
- 3º) si se tratare de delitos cuya pena privativa de la libertad en abstracto sea superior a TRES (3) años y no exceda de SEIS (6) años.
- 4º) si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto supere los SEIS (6) años y no exceda de QUINCE (15) años o, en caso de concurso de delitos, ninguno de ellos se encuentre reprimido con pena privativa de la libertad que supere dicho monto, salvo que el imputado o su defensor requirieren la intervención colegiada, opción que deberá ejercerse indefectiblemente en la oportunidad prevista por el artículo 349 de este Código.

Los TRIBUNALES ORALES DE MENORES se integrarán con TRES (3) jueces si se tratare de delitos cuya pena máxima privativa de la libertad en abstracto exceda de QUINCE (15) años.

En caso de existir DOS (2) o más imputados con pluralidad de

El Poder Ejecutivo Nacional



defensores, la elección por UNO (1) de ellos del juzgamiento colegiado obligará en igual sentido a los restantes.

ARTÍCULO 15.- Sustitúyese el artículo 349 del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

"Facultades de la defensa"

ARTÍCULO 349.- Siempre que el agente fiscal requiera la elevación a juicio, las conclusiones de los dictámenes serán notificadas al defensor del imputado, quien podrá, en el término de SEIS (6) días:

- 1º) Deducir excepciones no interpuestas con anterioridad.
- 2º) Oponerse a la elevación a juicio, instando el sobreseimiento.
- 3º) Solicitar expresamente la intervención de un tribunal colegiado, según corresponda.

Si no dedujere excepciones u oposición, la causa será remitida por simple decreto, que declarará clausurada la instrucción, al tribunal que corresponda, en el término de TRES (3) días de vencido el plazo anterior.

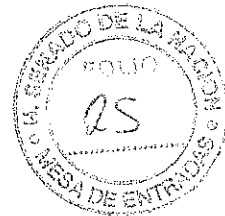
Dicho decreto deberá mencionar si el defensor o el imputado se expidieron en los términos del inciso 3º) del presente artículo."

ARTÍCULO 16.- Sustitúyese el artículo 351 del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

"Auto de elevación"

ARTÍCULO 351.- El auto de elevación a juicio deberá contener, bajo pena de nulidad: la fecha, los datos personales del imputado, el nombre y domicilio del actor civil y del civilmente demandado, una relación clara, precisa y circunstanciada de los

El Poder Ejecutivo Nacional



hechos, su calificación legal, la parte dispositiva y la información prevista en el artículo 349, último párrafo.

Indicará, en su caso, cómo ha quedado trabada la litis en las demandas, reconvenciones y sus contestaciones.

Si existieren varios imputados, aunque uno solo de ellos haya deducido oposición, el auto de elevación a juicio deberá dictarse respecto de todos."

ARTÍCULO 17.- Sustitúyese el artículo 354 del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

"Integración del tribunal. Citación a juicio

ARTÍCULO 354.- Recibido el proceso, se verificará el cumplimiento de las prescripciones de la instrucción.

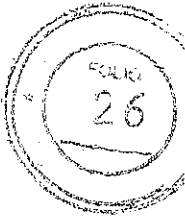
Para el caso de corresponder la integración unipersonal, el Presidente del Tribunal, procederá al sorteo de la causa entre los TRES (3) Magistrados, según el ingreso de los casos y bajo un sistema de compensación, de forma tal que la adjudicación sea equitativa.

En caso de excusación o recusación del juez de trámite de la causa, la Secretaría procederá a reasignar la misma sorteando entre los restantes miembros, con igual criterio de equilibrio en la distribución.

Integrado el tribunal, el vocal actuante o el presidente del tribunal, según corresponda, citará al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y a las otras partes a fin de que al término de DIEZ (10) días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas, ofrezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes.

[Handwritten signature]

*El Poder Ejecutivo
Nacional*



En las causas procedentes de juzgados con sede distinta a la del tribunal, el término será de QUINCE (15) días."

CAPÍTULO IV

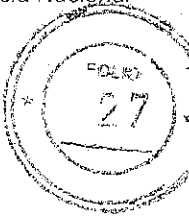
MODIFICACIONES A LA LEY N° 24.050

ARTÍCULO 18.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 24.050 y sus modificatorias por el siguiente texto:

"ARTÍCULO 2°.- EI PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, en materia penal, estará integrado por:

- a) La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
- b) La CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL.
- c) La CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL.
- d) Los TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, en lo PENAL ECONÓMICO, de MENORES, en lo CRIMINAL FEDERAL DE LA CAPITAL FEDERAL y FEDERALES con asiento en las provincias.
- e) Las CÁMARAS NACIONALES DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, en lo PENAL ECONÓMICO, en lo CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL DE LA CAPITAL FEDERAL y CÁMARAS FEDERALES DE APELACIONES con asiento en las provincias.
- f) Los JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, en lo PENAL ECONÓMICO, de MENORES, en lo CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL DE LA CAPITAL FEDERAL y FEDERALES con asiento en las provincias.

El Poder Ejecutivo Nacional



- g) Los JUZGADOS NACIONALES DE EJECUCIÓN PENAL.
- h) El JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL DE ROGATORIAS.
- i) Los demás organismos que se establezcan por la ley."

ARTÍCULO 19.- Sustitúyese el artículo 12 de la Ley N° 24.050 y sus modificatorias por el siguiente texto:

"ARTÍCULO 12.- Los TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL de la CAPITAL FEDERAL conocerán en los supuestos establecidos por el artículo 25 del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias."

ARTÍCULO 20.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley N° 24.050 y sus modificatorias por el siguiente texto:

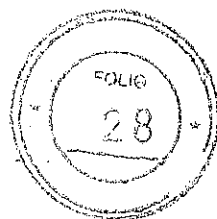
"ARTÍCULO 18.- La CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL de la CAPITAL FEDERAL será tribunal de alzada en los supuestos previstos en el artículo 24 del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias.

Estará integrada por DIECISÉIS (16) miembros y funcionará dividida en CINCO (5) salas de TRES (3) miembros cada una, ejerciendo la presidencia el miembro restante."

ARTÍCULO 21.- Sustitúyese el artículo 22 de la Ley N° 24.050 y sus modificatorias por el siguiente texto:

"ARTÍCULO 22.- Los JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL conocerán en los casos establecidos en el artículo 26 del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por Ley N° 23.984 y sus

*El Poder Ejecutivo
Nacional*



modificatorias."

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 22.- A los efectos de la presente ley, las menciones referidas a los JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN y a los JUZGADOS NACIONALES EN LO CORRECCIONAL, o a los TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL, incluidas en el artículo 32 del Decreto-Ley N° 1.285/58, ratificado por la Ley N° 14.467, y sus modificatorias, o en otras normas, se considerarán referidas a los JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL y a los TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, respectivamente. Serán aplicables, en lo pertinente, las disposiciones del Decreto-Ley citado a los órganos que por esta ley se transforman.

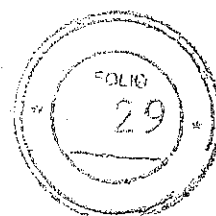
ARTÍCULO 23.- Derógase el artículo 27 del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 24.- Derógase el artículo 44 del Decreto-Ley N° 1.285/58, ratificado por la Ley N° 14.467, y sus modificaciones.

ARTÍCULO 25.- Derógase el artículo 23 de la Ley N° 24.050.

ARTÍCULO 26.- Las causas actualmente en trámite ante los ex JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN y los ex JUZGADOS NACIONALES EN LO CORRECCIONAL quedarán radicadas ante los órganos en que se encuentren, los que con la denominación establecida en el primer párrafo del artículo 1° deberán continuar su tramitación, con excepción de lo establecido en el artículo 27.

El Poder Ejecutivo Nacional



ARTÍCULO 27.- Las causas que se encuentren en etapa de juicio ante los ex JUZGADOS NACIONALES EN LO CORRECCIONAL se reasignarán mediante sorteo a los TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, con excepción de aquellas que hubieren cumplido con el trámite del artículo 354 del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 28.- Las disposiciones sobre la realización de los juicios unipersonales serán de aplicación a las causas que se hubieran iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

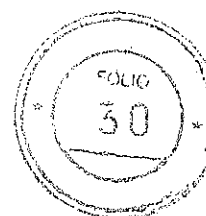
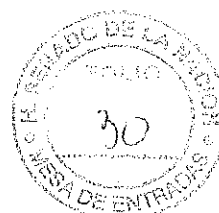
ARTÍCULO 29.- El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y el MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA, en el ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas conducentes para asignar a los fiscales y defensores que se desempeñarán ante los JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL y ante los TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, tanto en su función de tribunal unipersonal como colegiado.

ARTÍCULO 30.- Las erogaciones necesarias para la implementación de la presente ley se imputarán al presupuesto correspondiente al PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN previsto para el ejercicio 2016.

ARTÍCULO 31.- La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la presente ley.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

El Poder Ejecutivo Nacional



ARTÍCULO 32.- La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación oficial y su implementación se efectuará de conformidad con el cronograma que establezca la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN que funciona en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, previa consulta al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a través de la SECRETARÍA DE JUSTICIA y al Presidente del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.

ARTÍCULO 33.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

LIC. MARCOS PEÑA
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DR. GERMAN CARLOS GARAVANO
MINISTRO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS